IMPRENTA SAN DIEGO
SAN DIEGO 173
SANTIAGO

PRECIO $ 10.-

EUGENIO GONZALEZ R.

LA CRISIS CHILENA

EDICIONES
ESPARTACO

SANTIAGO
1 9 5 2

EUGENIO GONZALEZ, autor de este folleto, es una figura conocida de la política y las letras. Fundador del Partido Socialista en nuestro país, ha mantenido inquebrantablemente sus ideales revolucionarios con un desprecio absoluto hacia los aventureros que, enarbolando la bandera socialista, han abandonado el camino de la revolución chilena para servir solícitamente a los gobernantes de turno. Por lo mismo se mantiene dentro del Partido Socialista Popular, la única colectividad que representa en Chile el pensamiento, la moral y la acción socialista

Aparte de su dedicación al movimiento revolucionario, Eugenio González ha descollado en la docencia universitaria y en la literatura nacional. Como profesor de Sociología y Filosofía en el Instituto Pedagógico ha brindado su ilustración y su afecto de maestro a varias generaciones de estudiantes, muchos de los cuales son hoy destacados profesores. Es un novelista de gran valor, cuya fluidez y galanura de su estilo lo destacan entre los mejores de nuestro país. Entre sus libros más conocidos se encuentran "Hombres", "Destinos", "Más Afuera", "Noche", etc.

El folleto que hoy ofrecemos a los lectores comprende dos discursos pronunciados en diferentes fechas, pero que se complementan perfectamente. En ellos, el autor ubica al Partido Socialista Popular dentro de nuestra realidad histórica y presenta un cuadro de la crisis que está viviendo el país, señalando, en somera síntesis, las soluciones que su partido propone para conjurarla y asegurar a Chile un destino superior.

EUGENIO GONZALEZ R.

LA CRISIS CHILENA

★

EDICIONES "ESPARTACO"
SANTIAGO
1952

EL SOCIALISMO ES REVOLUCIONARIO

Un partido político nuevo aparece en el seno de una sociedad democrática cuando responde a los intereses y a las aspiraciones de un sector social que carecía de cabal expresión en los organismos existentes. Al fundarse en Chile el Partido Socialista, en abril de 1933, se daban las condiciones objetivas para que los trabajadores intelectuales y manuales actuaran de consuno en una colectividad política propia, puesto que ninguno de los partidos tradicionales representaba cumplidamente sus intereses económicos y sus aspiraciones sociales, dentro de una doctrina que concordara con el sentido del movimiento histórico.

Tampoco los representaba el Partido Comunista cuya ideología de contornos demasiado rígidos, cuya estrategia de líneas mundiales y cuya táctica de esquemáticas consignas no podían servir con eficacia en el orden político los impulsos reivindicativos de la clase trabajadora chilena. Sin desconocer el alcance internacional de la solidaridad del proletariado y la necesidad de coordinar también internacionalmente su acción política —fenóme-

nos derivados de la universalización de las formas de vida y de trabajo que impone el desarrollo del capitalismo—, el Partido Socialista emerge como producto natural de las circunstancias económico-sociales, dentro de la continuidad orgánica de nuestra evolución democrática.

Como en todas partes, el socialismo representa en Chile la proyección hacia el futuro inmediato del proceso creador de valores que constituye la cultura. De ahí que los socialistas experimentemos muy acentuadamente el sentimiento de la solidaridad de las generaciones y sepamos apreciar los aspectos positivos de cada etapa de nuestro pasado nacional. Juzgando a los hombres, a las clases y a los regímenes en su propia perspectiva, nos colocamos en condiciones de aprehender su significación histórica y aquilatar el aporte que hicieron al progreso general de la sociedad y del Estado.

Frente a la sociedad burguesa, los partidos socialistas son revolucionarios, como en otra época lo fueron, frente a la sociedad nobiliaria, los partidos liberales. La condición revolucionaria del socialismo no depende de los métodos que emplea para alcanzar sus objetivos sino de la naturaleza de su impulso histórico, que lleva a un cambio radical en el régimen de propiedad y en la forma de convivencia. Pero, siendo revolucionario, el socialismo es también creador. Para superarlas, dándoles la plenitud de su sentido humano, el socialismo recoge las conquistas políticas de la burgesía liberal y pretende poner al alcance de todos los miembros de la colectividad trabajadora los bienes de la civilización técnica desarrollada aceleradamente y en escala mundial por el sistema capitalista.

El carácter mecánico de la economía burguesa, el cúmulo de factores impersonales generados por su desarrollo, la implacable primacía de un abstracto cálculo utilitario sobre los imperativos morales y las necesidades humanas, tuvieron que promover desde un comienzo reacciones de la conciencia pública en forma de imprecisas iniciativas de reformas humanitarias y rebeldías del naciente proletariado, en forma de movimentos esporádicos y sin trascendencia. Sin embargo, es en ellos donde hay que buscar la raíz del socialismo contemporáneo como fuerza política.

Colocada en cierto modo al margen del Estado democrático-liberal, la clase obrera fué determinando sus objetivos específicos en consonancia con los progresos del industrialismo y canalizando su fuerza en organizaciones políticas y sindicales, a cuya creciente influencia se ha debido principalmente el perfeccionamiento de los sistemas jurídicos con nuevos conceptos de naturaleza social, la modificación de la estructura democrática en términos que aseguren su eficacia representativa y la ingerencia reguladora del poder público en el proceso económico.

La fuerza política y sindical de la clase trabajadora —expresión ella misma de las condiciones de vida creadas por el desarrollo capitalista— no ha hecho otra cosa que operar conscientemente en el sentido de favorecer, acelerándola, la inevitable transformación del régimen económico-social. Ya el capitalismo estrictamente liberal, basado en la libre concurrencia, ha dejado de existir y tampoco logran resultados positivos las empresas monopolistas en los intentos que realizan para coordinar las actividades económicas dentro del marco de la propiedad privada de los medios de producción.

Un conocido sociólogo contemporáneo, Karl Manheim, que no puede ser considerado de utopista ni menos de revolucionario, estima que la mayor parte de los complejos síntomas de nuestro tiempo se deben al paso del régimen de "laissez-faire" a una sociedad planificada; de una democracia para pocos, a la política de masas; y de un sistema de técnicas sociales a otro de superior complejidad. Un régimen como el de economía libre, que ha dejado de ser históricamente positivo, reduce el margen de acción de las iniciativas creadoras y entraba, esterilizándolas, las fuerzas vitales de la sociedad.

EL CAPITALISMO DESTRUYE LA PERSONALIDAD HUMANA

Dentro del capitalismo —aunque este consiga sustraerse transitoriamente a los agudos efectos de sus crisis periódicas, mediante una planificación básica—, las posibilidades de progreso social y de dignificación humana tendrán que verse sofocadas y subsistirán, en cambio, las tensiones por los mercados y las fuentes de materias primas, los injustos desniveles de vida y el paro forzoso de hombres hábiles, la general inseguridad frente a un proceso que depende de la voluntad de lucro de minorías dueñas de la técnica y del dinero.

Lo más grave del capitalismo es que se afirma, de hecho, en una negación de la persona humana. Impide a la mayoría de los hombres, adscritos a la servidumbre moderna del salario, el acceso a los bienes de la cultura y los limita a todos por igual —capitalistas y obreros— en una práctica mecánicamente rutinaria del trabajo y en una concepción sórdidamente utilitaria de la vida. El socialis-

mo se esfuerza por establecer condiciones que permitan devolver al trabajo su alegría creadora y a la vida su dignidad moral.

Porque nuestra política no se basa, como muchos parecen creer, en las abstractas consideraciones de una teoría económica, sino en las necesidades reales del hombre concreto, suelen confundirse —y ello es frecuente en ésta época de superficiales controversias— los medios con los fines. Para el socialismo, la transformación radical de la estructura económica es sólo el medio para posibilitar el fin, que es el pleno desenvolvimiento de la personalidad humana, hoy día desvirtuada en sus más nobles atributos y convertida en mero resorte de la maquinaria productora.

De ahí que sea arbitrariedad de la ignorancia, cuando no propósito de intencionada malicia, sostener que el socialismo es incompatible con la libertad y, por lo tanto, siendo ésta su esencia, con la democracia. La socialización del poder económico que propicia el socialismo no implica que ella se realice en forma de centralización totalitaria impuesta por una burocracia estatal. Por el contrario, afirma que el paso de la sociedad burguesa a la sociedad sin clases sólo podrá realizarse, sin menoscabo de sus fines libertarios y humanos, sobre la base de las organizaciones sindicales y técnicas de la clase trabajadora, es decir, de la clase que comprende a cuantos viven de sueldos, salarios o remuneraciones directas por su trabajo personal. Así concebida, la clase trabajadora es, en todas partes, la mayoría nacional.

Como heredero del patrimonio cultural, repudia el socialismo cualquiera forma de Estado totalitario. Los fueros de la conciencia personal, en lo que concierne a los sentimientos y a las ideas así como a su expresión legí-

tima, son tan inalienables para el socialismo como el derecho de los trabajadores para designar a sus representantes en la dirección de las actividades comunes. No excluye, pués, el socialismo ninguno de los modos superiores de vida espiritual. A la inversa, él es la única garantía de que en un futuro próximo puedan ellos darse con mayor contenido humano, una vez superada la crisis porque atraviesa el mundo contemporáneo.

NO DESEAMOS UN NUEVO PORTALES

De conformidad con estos conceptos fundamentales estamos actuando en la política nacional. Nuestra acción responde en Chile, como la de los partidos verdaderamente socialistas en los demás países, a exigencias ineludibles de la situación histórica. A menudo se deja de percibir el carácter esencialmente dinámico de la realidad social y las instituciones en vigencia son consideradas eternas Así, los dirigentes de la época de la república autoritaria consideraron díscolos utopistas a quienes pugnaban por reformas liberales del régimen político. Todavía en pleno primado del espíritu colonial no podía concebirse sino una sociedad estática, afirmada en convenciones invariables y en creencias hereditarias.

El respeto casi místico al poder intemporal que posteriormente se ha considerado genial creación de don Diego Portales —convertido en una especie de mito operante por la propaganda de partido— fué sólo la expresión de los sentimientos tradicionales de acatamiento y jerarquía que caracterizaron el régimen de conciencia imperante en la Colonia y que se prolongó por largos decenios en la so-

ciedad republicana. A diferencia de lo que aconteció en otros países hispanoamericanos —en los que la guerra emancipadora convulsionó de manera profunda los estamentos étnicos y sociales—, hubo aquí un político de mano dura y visión práctica capaz de utilizar, unificándolas para la consolidación del Estado, las fuerzas conservadoras de la aristocracia territorial.

Tarea positiva, sin duda, en un medio como el nuestro y en una época como aquella; pero no dejemos que se desvirtúe el juicio histórico y se perturbe el criterio político con una forzada actualización del mito portaliano que, dentro de la etapa presente de nuestra evolución republicana, sólo podría tener una eficacia reaccionaria. El autoritarismo presidencial no se concilia con las exigencias del progreso democrático, y el hecho de que fuera eliminado en un proceso que culmina con la revolución de 1891 denota que ya entonces había dejado de corresponder al estado real de las fuerzas políticas. Las restauraciones son imposibles. El no comprenderlo es característico de los románticos del pasado, lo que no entraña peligro alguno si son poetas, pero sí y muy serios si son estadistas.

¿Qué sucedería en Chile, por ejemplo, si algún estadista vehemente, al tomar contacto en cualquiera tertulia de sobremesa con los cultores del mito portaliano, cayera en el empeño de tomarlo como modelo para sus actuaciones públicas?. Por cierto, no sufrirían los efectos de la energía providencial los herederos de los pipiolos de antaño, que son elementos conservadores del régimen social. Los sufriríamos seguramente los socialistas, los que ahora, como entonces ellos, propiciamos transformaciones institucionales que repugnan a los intereses creados.

No deseamos los socialistas que aparezca un nuevo

Portales, aunque sea de menor estatura. Si el Portales original sojuzgó a las facciones políticas que no querían inclinarse bajo "el peso de la noche", sin necesidad de montar un aparato legal de represión, sólo con los recursos que le franqueaba la Carta Constitucional, ¿qué no podría hacer un Portales contemporáneo, disponiendo de un instrumento de tanto alcance coactivo como la llamada Ley de Defensa de la Democracia? ¿No basta acaso con la eficacia represiva de que saben dar muestras las autoridades de turno?.

BALMACEDA Y EL VALOR DE LA TRADICION

Otro, sería, en cambio, nuestro deseo: que surgiera, dignificando nuestra vida pública, un hombre realmente señero como don José Manuel Balmaceda, personalidad por donde se le mire superior a su medio y a su tiempo, en la que armoniosamente se conciliaron las altas dotes del talento y del carácter, la amplia visión del estadista de rango y la recia voluntad de un constructor apasionado en el servicio de su pueblo. Fecunda como pocas su actividad política y, sin exageración puede decirse, inigualado entre nosotros el noble estilo que se trasunta, con impresionante coherencia, en sus actitudes y en sus palabras, tanto en el ejercicio del poder como en las vísperas de su sacrificio, en su vida y en su muerte. Sería irrespeto inexcusable compararlo —aunque fuera en ocasionales desbordes de la gratitud partidaria— con cualquiera que confunda la energía del hombre de Estado con los arrestos del personalismo.

Los socialistas miramos hacia la tradición, pero con inquietud de futuro. Nos sentimos solidarios del pasado nacional, tanto por efectivo ligamen como por comprensión histórica. Otros partidos lucharon antes que el nuestro por las libertades políticas, se esforzaron por modernizar nuestras instituciones civiles y aun propiciaron reformas sociales. Reconocemos la obra realizada, pero queremos realizar también la nuestra. Como Partido Socialista Popular tenemos los objetivos lejanos que ya he señalados y los objetivos inmediatos que sumariamente indicaré; los primeros definen nuestra oposición revolucionaria al régimen económico-social existente; los segundos, nuestra oposición democrática al actual Gobierno de la República.

MISERIAS DE UN REGIMEN

Más de una vez me ha correspondido exponer el pensamiento de mi Partido frente a la crisis nacional, que se ha ido acentuando peligrosamente en el curso de la Administración del señor González Videla. La determinan, en su esencia, los factores propios del atraso de nuestra estructura económica y política, y el relajamiento de los ideales de vida en las diversas capas de la sociedad. A ellos se suman otros factores, de orden contingente, como la falta de coherencia de las actuaciones gubernativas, la anarquía de los partidos y la impúdica avidez de los grupos plutocráticos.

Síntomas reveladores del quiebrantamiento de nuestro régimen económico social y de la insuficiencia jurídica de

nuestro sistema político, son, por ejemplo, las huelgas que día a día se suceden como efectos naturales del aumento en el costo de la vida y la falta de mecanismos adecuados de reajustes de sueldos y salarios. Siempre a la zaga de los hechos, reaccionando sólo cuando los problemas se tornan amenazantes, sin el menor sentido de la previsión, base de toda política seria y de largo alcance, el Gobierno aparece conducido —al azar de las circunstancias y en virtud de las presiones de los grupos políticos, económicos y gremiales— de un punto a otro en el campo de las soluciones posibles, desprovisto de plan y de voluntad, acomodaticio y arbitrario, juguete de las fuerzas que debiera organizar y dirigir, en función de la conveniencia pública y del destino nacional.

El Gobierno da la impresión de vivir al día, improvisando superficiales medidas de emergencia para salir de las dificultades inmediatas, aunque con ellas se generen otras mayores y se acentúe la descomposición económica, social, política y moral del país. Hay ocasiones en que ha parecido dispuesto a sacudir su inercia: anuncia vastos planes económicos financieros destinados a frenar el proceso inflacionista y estabilizar los precios de los artículos esenciales; celoso de su deber pregona enfáticamente su propósito de evitar los movimientos gremiales con medidas de justicia social; y, en súbita conciencia de su autoridad, amenaza con drásticas sanciones a los especuladores.

Pero, los precios siguen subiendo, los especuladores siguen especulando, los gremios siguen obligados a recurrir a la huelga, y el Gobierno y los partidos que lo acompañan agregan el ridículo a su ineficacia. ¿Podría ser de otra manera?. ¿Subsistiendo las causas, sería dable

que desaparecieran los efectos?. La verdad es que ninguna de las iniciativas de fondo anunciadas al constituírse el Gabinete de Febrero de 1950 ha sido llevada a término cumplido. La Ley de Defensa de la Democracia ha seguido aplicándose a obreros, empleados y periodistas. Las alzas de artículos básicos de consumo popular son autorizadas después de hipócritas forcejeos entre las autoridades y los empresarios. La producción permanece estagnada y en desorden a pesar de los múltiples organismos con que el Estado cuenta para estimularla y controlarla. El despilfarro de los dineros fiscales en gastos de mero aparato alcanza proporciones que indignan a los trabajadores y a los contribuyentes. La población analfabeta se ve acrecentada año tras año con miles de niños que no encuentran donde matricularse. El fuerte déficit de viviendas y de alimentación se mantiene, con las consecuencias presumibles en el régimen de vida de las masas populares. En fin, ¿a qué seguir?.

Mantenidas en un estado de inquietud permanente por angustiosas necesidades de todo orden —materiales y espirituales— las masas intuyen, de manera oscura pero certera, la inminencia de una catástrofe, y los ciudadanos capaces de apreciar en su fondo y trascendencia la situación nacional no pueden dejar de sentirse extraordinariamente alarmados ante la sombría perspectiva de nuestro porvenir inmediato. Unos instintivamente, otros lúcidamente, todos los chilenos se están dando cuenta de que el país se encamina a la bancarrota económica y al caos social, sin que se advierta en los dirigentes del Estado el severo concepto de su responsabilidad, la necesaria competencia para la solución de los problemas fundamentales y la sincera voluntad de servir al pueblo que se requie-

ren, para superar la crisis en una etapa histórica como la que vive Chile.

Por el contrario, se observa en ellos lamentable ligereza y desaprensiva frivolidad para juzgar los problemas y los conflictos; propensión arbitrista a las soluciones parciales y de emergencia, que agravan a corto plazo la situación general; excesiva flexibilidad para acomodarse a las presiones de los grandes intereses. Ninguna idea trascendente. Ningún esfuerzo positivo. Ningún propósito serio. Simples palabras, imprecisos enunciados, proyectos de proyectos para encubrir la ausencia de un criterio de Gobierno, de un plan de Gobierno, de una voluntad de Gobierno. Pero, en cambio, ¡con qué diligencia se mueven los dirigentes de los partidos de Gobierno y los mismos gobernantes, con qué apasionamiento discuten en los pasillos del Congreso y en los salones de la Moneda, con qué fruición esgrimen su dialéctica "doctrinaria" cuando se trata de algo tan importante para el destino patrio como la jefatura del Departamento de Aseos y Jardines de la Municipalidad de Santiago!..

EN MEDIO DE UNA CRISIS UNIVERSAL

Mientras tanto, se acumulan en nuestra perspectiva nacional los signos de tormenta y se arremolinan, en confusa pugna de intereses y de ideologías, las fuerzas sociales. Vivimos en un mundo caótico; formamos parte de una humanidad desorientada. No podemos separar nuestro problema del problema mundial. Nuestra crisis está contenida en la crisis total de esta época. Corrientes espirituales, movimientos políticos, influencias económicas de la misma

naturaleza se entrecruzan en todas las latitudes por encima de los cánones en falencia de las culturas milenarias, imprimiendo a la vida, a la sociedad y al Estado un mismo estilo: el que se ha definido en el desarrollo del capitalismo moderno y se ha propagado en su expansión imperialista.

Al continente que se mire, se verá el mismo espectáculo: sobre cualquiera preocupación acerca del valor esencial de la vida y del hombre prevalecen los afanes de una frenética avidez utilitaria. Todo se hace en función de la economía, pero no de la economía como base del bienestar humano, sino de la economía como fuente de poder material para los grupos dirigentes de la sociedad y, sobre todo, para el Estado. Bajo el actual régimen de paz armada, el capitalismo en decadencia disimula sus fallas estructurales y posterga su crisis decisiva, a costa de los pueblos y de los Estados sujetos a su control imperialista. Por su parte, el frente de las naciones soviéticas extrema también la tensión de sus energías industriales, con vistas a mantener, de un modo progresivamente favorable a sus designios, la correlación de fuerzas de la política mundial.

Ya no se trata, como en las estapas juveniles del capitalismo, de una competencia de grandes empresas, apoyadas diplomática y militarmente por los Estados respectivos, en la conquista de las fuentes de materias primas y de mercados de consumo. Ahora la puesta del juego es el dominio del mundo. Como anota Toynbee, —el más destacado historiador inglés de nuestros días— "si el hombre fuera solamente el *homo económicus* no habría razón alguna para que Rusia y Estados Unidos debieran chocar durante generaciones enteras. Más, el hombre es,

por desgracia, un animal tanto político como económico, no sólo debe luchar contra la necesidad, sino también contra el miedo y, en el plano de las ideas y de las ideologías, Rusia y Estados Unidos no pueden tan fácilmente dejar de cruzar el uno el camino del otro, quedándose en casa y cultivando, cada uno, su propio jardín"

LATINOAMERICA Y LA PAZ ARMADA

Víctimas de la paz armada son los mismos pueblos de los Estados en lucha por la hegemonía, pero principalmente los países dependientes. La situación económica de todos ellos fluctuará, en rubros esenciales de la producción y el consumo, a compás de las necesidades estratégicas y su propia autonomía política, irá siendo cada vez más condicionada por intereses ajenos a su índole y a su destino. Por presiones indirectas, económicas y culturales, y, si el caso lo requiere, por presiones directas, diplomáticas y militares, los países dependientes se ven arrastrados a participar en los planes de dominio de las grandes potencias.

Es, actualmente, el caso de los países latinoamericanos. Situados dentro de la órbita del capitalismo norteamericano y necesarios para el desarrollo de sus planes hegemónicos, son objeto de injusto trato en la exportación de sus materias primas y en la importación de productos industriales, a la vez que son instados a suscribir convenios por los cuales se incorporan, en los hechos, a la organización bélica de los EE. UU. Acaba de despachar el Parlamento uno de estos convenios bilaterales —ya condenados por la opinión pública— en el que, mediante fór-

mulas convencionales y cláusulas equívocas, se establecen obligaciones para nuestro país que, de ser cumplidas, gravitarán perturbadoramente sobre nuestra débil economía, subordinarán la gestión de nuestras instituciones armadas, comprometiendo la independencia nacional y, sobre todo, desvirtuarían la voluntad de paz del pueblo chileno.

Por razones esenciales de doctrina y por razones de bien entendido patriotismo, los socialistas populares estamos contra cualquier convenio de orden militar que adscriba a Chile a una política de guerra. Queremos la paz y para contribuír a defenderla creemos impostergable la concertación de la política internacional de los países latinoamericanos, sobre la base de un sistema de relaciones económicas que asegure a cada uno de ellos el íntegro aprovechamiento de sus riquezas naturales en el comercio internacional, el desarrollo diversificado de sus fuerzas productivas y la armónica compensación de sus propios mercados.

Una efectiva colaboración democrática no es posible, aisladamente, entre los Estados Unidos de Norteamérica y cada uno de los Estados Latinoamericanos. Sería fecunda, en cambio, entre los Estados Unidos de Norteamérica y *el conjunto de los Estados Latinoamericanos*. Utopía para algunos, en la actual fase de desarrollo de los países latinoamericanos, la formación de un Frente Anti-imperialista de todos ellos, es, sin embargo, exigencia vital para nuestros pueblos, si quieren dejar de ser simples objetos y convertirse en sujetos activos del acontecer histórico. Es cierto que aún no se dan las condiciones para la integración económica y política de todos ellos, pero cabe, sí, favorecer su progreso económico y preservar su libertad política mediante pactos multilaterales en los que se atienda a la complementación de sus esfuerzos productores y de

sus actuaciones diplomáticas, en relación con el fuerte capitalismo imperialista de los Estados Unidos.

LA QUIEBRA DE NUESTRA ECONOMIA

La crisis nacional, en su aspecto económico, depende de factores permanentes y de factores circunstanciales. Los primeros tienen que ver con la coexistencia de formas anacrónicas y sistemas de avanzada en nuestra confusa economía, y los segundos dicen relación con la dependencia en que se encuentran los productos básicos de nuestras industrias extractivas de las condiciones de su mercado exterior fijadas ahora, en gran escala, por las conveniencias políticas del Gobierno norteamericano. El alza general y contínua de precios que se observa en los países del área llamada "democrática", es decir, en los países subordinados económica y financieramente a los centros del capitalismo occidental, se presenta entre nosotros con una aceleración excepcional que sólo puede explicarse por la acción de estímulos internos, de índole contingente, propios del desorden característico de nuestra economía.

El proceso inflacionista acusa, en nuestro país, creciente gravedad que calificados personeros de diversos partidos han puesto de relieve, con acopio de abrumadoras estadísticas. La masa de los asalariados, públicos y particulares que constituye la mayoría de la población, sufre directa y dramáticamente en su vida cotidiana los efectos del proceso inflacionista, pero también lo experimentan las empresas que, con utilidades previstas en sus planes, no alcanzan a compensar los aumentos que ulteriormente se van produciendo en los costos. La desvalorización real de

los capitales originarios suele ser mayor que las ganancias nominales de los balances.

La inflación no puede ser aminorada con procedimientos mecánicos, de carácter puramente administrativo. Ella no es la causa inicial, sino el efecto inevitable del desorden económico; pero, dentro de la complejidad funcional y de la interdependencia orgánica de los procesos sociales, una vez producida opera como factor determinante de ulteriores complicaciones. Así se produce el "círculo infernal" de que hablara el Presidente de la República. ¿Sería, entonces, posible paralizarla, o atenuarla al menos, congelando los sueldos y salarios, como sostienen los economistas de la Derecha, o congelando los precios, como piensan los economistas de Izquierda, para obtener un equilibrio automático mediante el juego de la oferta y la demanda?. ¿O es necesario actuar al mismo tiempo sobre los unos y los otros y además sobre la renta de toda clase, las contribuciones y gravámenes y los gastos públicos?.

Los resultados de semejante política antiinflacionista podrían ser, sin duda eficaces, pero durante un plazo breve, si no se atendiera al fondo mismo del problema. Aparte de la tendencia predominante en la economía mundial al alza de precios, cabe destacar, como factores básicos de inflación en nuestro país los siguientes: 1º.— La debilidad orgánica de la economía nacional. 2º.— La tendencia a desarrollarla mediante la industrialización y el fomento de las inversiones públicas. 3.o.— La necesidad de mejorar las condiciones de vida de las masas populares. 4º.— La vigencia, en lo esencial, del régimen de empresa libre. 5º,— La desproporcionada capacidad de consumo de los grupos plutocráticos.

Brevemente, me referiré a cada uno de estos aspectos de acuerdo con los puntos de vista del Comité Técnico de mi Partido.

Nuestra debilidad económica es notoria. Basta considerar la escasa productividad por hombre en trabajo; nuestra dependencia del comercio exterior; el desequilibrio, desfavorable para nosotros, del intercambio; los valores sin retornar de la gran minería; nuestro incipiente desarrollo fabril y el retraso de nuestra agricultura, cimentada todavía en anti-económicas formas de propiedad y en anticuados métodos de trabajo. Un índice de la escasa productividad de nuestra economía es el ingreso nacional por individuo activo.

A pesar de la debilidad orgánica de nuestra economía se manifiesta en ella una tendencia hacia el incremento de la producción. La renta nacional por individuo —la renta nominal, naturalmente— ha aumentado en los últimos años, como asimismo la población activa. Industrias básicas para el fomento económico, como la siderúrgica y la hidroeléctrica, se han desarrollado considerablemente y también algunas de carácter un tanto parasitario, como ciertas ramas de la textil que sofocan nuestro enjuto mercado interno con productos de dudosa calidad.

Por otra parte, la evolución cultural del país ha ido imponiendo nuevas formas de vida dentro de las cuales la acción organizada de los trabajadores adquiere cada día mayor importancia y determina la dictación y el perfeccionamiento de leyes relativas al trabajo y a la seguridad social. Han mejorado las condiciones de subsistencia de los obreros y empleados de los grandes centros industria-

les; pero, en las demás categorías de trabajadores, especialmente entre los campesinos, no se ha producido un alza sensible del nivel de vida. El aumento real del poder de compra por individuo sólo se ha elevado en un 2 por ciento, aproximadamente, durante los últimos vente años.

El régimen de libre empresa favorece eficazmente la inflación a través de las inversiones y del consumo de la plutocracia. La fuerte capacidad de consumo de los grupos económicamente privilegiados, es una de las causas de la baja capitalización nacional (5 a un 6 por ciento de la renta nacional). Ahora bien, si en un país como el nuestro, cuyos factores productivos están totalmente ocupados, el costo de los planes de industrialización excede al monto del ahorro real, no podrá encontrarse para ellos otra base financiera —aparte de la muy eventual de los empréstitos extranjeros— que la desvalorización de la moneda.

La libertad económica ha tenido también consecuencias negativas a través de la economía pública inserta en nuestro sistema capitalista, cuya expansión se ha producido sin una restricción correlativa de la economía privada. La economía pública se financia con emisiones que, al aumentar los depósitos de los bancos y, por consiguiente sus colocaciones, acentúan el proceso inflacionista, lo que significa, en último término, que la economía pública se desarrolla mediante la desvalorización de la moneda. Es decir, a expensas del pueblo.

Las tendencias de nuestra evolución económica conducen, pues, de manera ostensible a una situación catastrófica. Es preciso, entonces, actuar inmediatamente y con energía sobre aquellos factores de inflación que pue-

den modificarse por la acción sistemática del Estado, a través de las diversas empresas en que tiene intervención directa y de los múltiples organismos técnicos, administrativos y políticos que le permiten influir en forma decisiva sobre la economía nacional.

LAS FORMULAS DE LA REACCION

Hay una cosa clara: la política actual no puede seguir. Una política que se propone como objetivo redistribuir la riqueza disponible sin aumentar la producción y, por consiguiente, la renta nacional, tendrá como efecto seguro el alza del costo de la vida. Una política que tiende tanto a la expansión industrial como al mejoramiento de sueldos y salarios, sin restringir, al mismo tiempo, la capacidad de consumo de los grupos plutocráticos, de modo que aumente la capitalización nacional, y sin utilizar racionalmente, es decir, planificadamente, nuestros recursos humanos, económicos y técnicos se traducen inevitablemente en inflación.

El proceso inflacionista no puede ser bruscamente detenido, pero cabe atenuar su ritmo de manera progresiva si se adoptan medidas como las siguientes:

1.— Detener la expansión de nuestras fuerzas productoras y, en especial, de la economía pública.

2.— Paralizar la tendencia al mejoramiento de las condiciones de vida de los asalariados.

3.— Modificar el sistema económico, disciplinando la libertad de inversión y consumo:

Las dos primeras medidas corresponden a una política reaccionaria. La última define el sentido de una política constructiva. Una política incoherente, como la actual, en que se mezcla confusamente, al azar de las circunstancias, la libertad de empresa y el intervencionismo del Estado, sin que se delimiten y coordinen las distintas formas del proceso económico, bajo un criterio superior de planificación técnica, en escala nacional, agravará los males del presente, hasta extremos de imprevisible peligrosidad.

Las fórmulas reaccionarias para afrontar la crisis inflacionista consultan, en lógica convergencia, diversas iniciativas: aminorar la tendencia al desarrollo intensivo, con intervención del Estado, de las fuerzas productoras; restringir severamente los gastos presupuestarios, sobre todo en los rubros relativos al personal de la Administración Pública; hacer efectiva la más amplia libertad de empresa, suprimiendo los controles en vigencia; orientar el crédito y proporcionarlo en forma barata y expédita para el fomento de las empresas privadas; y, por último, —como base política de la recuperación económica— contener legal y aun policialmente el movimiento sindical, reducir los servicios y prestaciones de seguridad social y estabilizar de modo riguroso, sueldos y salarios.

Una política de esta especie, al frenar el desarrollo de las fuerzas productivas, mantendría y aun acentuaría nuestra dependencia del capitalismo extranjero; al respaldar el poder de compra de los grupos privilegiados, conservaría un factor básico de desequilibrio social: y, al hacer gravitar las restricciones económicas sobre los asa-

lariados cuyos niveles de vida no admiten descenso alguno, provocaría consecuencias de imprevisible alcance.

Los socialistas populares nos oponemos —por patriotismo y por doctrina—, a una política que, si bien es cierto atenuaría la crisis inflacionista, agravaría también la crisis orgánica de nuestra economía y, por consiguiente, la política del Estado.

LAS SOLUCIONES QUE EL PAIS EXIGE

¿Cuáles son, entonces, las medidas que en lugar de las indicadas propone el socialismo para dar una solución positiva a la crisis nacional? A nuestro juicio, el doble objetivo de incrementar nuestras fuerzas productivas y elevar el nivel de vida de las masas debe ser mantenido. Pero, a fin de que ello no se traduzca, como actualmente, en inflación —cuyos efectos terminan por gravitar sobre los asalariados— hay que planificar la economía en su conjunto poniendo en acción todos los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, y restingiendo la libertad de inversión y consumo de los grupos económicamente privilegiados, con el objeto de aumentar la capitalización nacional para el fomento de la producción.

Somos realistas. Mientras subsista la economía del mercado existirán determinadas relaciones sociales, basadas en estímulos egoístas de la conducta humana. No pretendemos, por eso en las actuales circunstancias, una reforma del sistema económico que excluya al interés legítimo de los particulares, ni la vigencia del principio de

la propiedad privada, dentro de las limitaciones jurídicas que le impone su carácter de función social; pero sostenemos que es imperativo coordinar la totalidad de nuestros recursos en un plan de conjunto que se inspire fundamentalmente en las necesidades de la comunidad y en el progreso del País.

La planificación de la economía —dentro de los marcos de la propiedad privada y del Estado democrático burgués— se ha hecho indispensable en los países de alto capitalismo. Para los países de limitado desarrollo, como el nuestro, la planificación es casi una condición de vida y, sin lugar a duda, una condición de independencia. La planificación que propiciamos no implica la burocratización de la economía, como lo temen ciertos críticos de nuestro programa, ni consulta tampoco la socialización del poder económico, meta ulterior de la política socialista. Es, simplemente, la ordenación eficaz del caos reinante en el plano de la producción, el intercambio y el consumo de la riqueza; ordenación que debe ser hecha bajo la dirección del Estado, por todos los que intervienen en el proceso económico, para provecho de todos ellos, es decir, de la comunidad nacional.

Sólo mediante la planificación económica puede mantenerse y aun acelerarse el actual ritmo de desarrollo de las fuerzas productoras, con miras a independizar nuestra economía del control imperialista y a aumentar el volumen de la producción, único medio efectivo de elevar el nivel de vida de nuestro pueblo. Las iniciativas inconexas y esporádicas que se ponen en práctica con criterio de improvisación, a medida que los problemas se tornan apremiantes, agravan la situación nacional.

LA PLANIFICACION ES NECESIDAD NACIONAL

La planificación económica requiere, en primer término, una clara determinación de fines y de medios y una precisa demarcación de las esferas de la economía privada y de la economía pública. ¿Hacia qué fines debe orientarse el esfuerzo económico nacional y a qué medios se recurrirá para alcanzarlos, dentro de nuestro sistema jurídico? Los planes de la Corporación de Fomento consultan, en lo esencial, aquellos rubros de producción que es conveniente favorecer y, en cuanto al consumo, hay concenso publico para estimar que son dos las necesidades más urgentes de nuestro pueblo: vivienda y alimentación. Un Presupuesto Nacional Económico, que concentre todos los recursos fiscales y privados —distinto naturalmente del Presupuesto Ordinario de Gastos— debe ser elaborado teniendo en vista los objetivos que se trata de alcanzar, por un Consejo Nacional Económico, en el que realmente estén representadas las fuerzas del trabajo.

Como la política crediticia es de primera importancia para encauzar las iniciativas económicas, sería indispensable modificar la directiva del Banco Central, dándole en ella mayor ingerencia a la representación técnica del Estado. La creacción del Banco Nacional de Fomento, a base de las instituciones semifiscales existentes, como único dispensador del crédito a largo y mediano plazo, permitiría desplazar progresivamente el volumen del crédito hacia las actividades económicas consultadas en

la planificación y, además, orientar la política de los Bancos Comerciales, de modo que sirvan también a los fines económicos del Estado. Con un sentido semejante estimamos que debiera orientarse la política tributaria que ahora sólo parece basarse en consideraciones de contabilidad fiscal. A través de ella, sin embargo, puede influirse decisivamente en la distribución de las inversiones y de los consumos, de manera que se vengan encuadrando dentro de las grandes líneas de la planificación económica. Para reajustar los gastos públicos y aumentar la eficiencia de los servicios, habría que racionalizar el aparato administrativo del Estado.

Para los mismos fines, sería necesario colocar progresivamente bajo la dirección del Estado, siguiendo el ritmo del proceso económico general, los servicios de utilidad pública (electricidad, teléfonos, gas, movilización), el comercio de seguros y el exterior, las minas de carbón y las empresas organizadas por la Corporación de Fomento. La creación de un organismo técnico que tenga ingerencia amplia en la industria del cobre, como también el control estatal efectivo de la Covensa, son medidas inaplazable dentro de una política económica de firme sentido nacional. El sometimiento de la gran minería al régimen común de nuestras exportaciones es de necesidad inaplazable.

Especial importancia tiene dentro de la planificación de nuestra economía, el fomento de la agricultura. Actualmente, ella se encuentra retrasada en su capacidad productiva, en condiciones de no poder satisfacer siquiera las necesidades de la población. Además, el nivel de vida de la masa campesina es a tal punto bajo, que no

se exagera al afirmar que está prácticamente al margen del mercado de consumo, como también está al márgen de la cultura. Mientras esta situación subsista, serán aleatorias las tentativas de industrialización y la economía nacional en su conjunto acusará peligrosos desequilibrios que debilitarán su desarrollo.

La explotación intensiva de productos calificados, de acuerdo con las características de las distintas zonas del país, parece más aconsejable que producir indiscriminadamente para atender, cualquiera sea el costo, al abastecimiento integral de la población. Tanto el latifundio improductivo como el minifundio antieconómico, constituyen rémoras de nuestro progreso agrícola. Hay que modificar el régimen legal de la tierra, haciendo del trabajo el fundamento de la propiedad. Mediante reformas del sistema tributario —diversificando, por ejemplo, las tasas del impuesto territorial de modo que se favorezcan quienes obtengan mejor rendimiento en sus explotaciones— y, sobre todo, a través de una eficaz orientación del crédito hacia los que cooperen con los organismos del Estado, es posible estimular seriamente el esfuerzo productivo de los agricultores, a la vez que encuadrarlos en los propósitos nacionales de la planificación económica.

Una seria planificación económica, con vistas al desarrollo de nuestras fuerzas productivas a través de una progresiva industrialización, exige orientar nuestra política exterior, como ya lo dijimos, hacia la coordinación económica con los demás países latinoamericanos, a fin de que, al diversificar sus esfuerzos industriales en aquellos rubros más acordes con sus posibilidades propias puedan armonizarse superiormente de manera que se asegu-

guren los respectivos mercados de consumo. Al mismo tiempo, a través de la coordinación económica de todos ellos, se establecerían las bases de su efectiva independencia frente a los poderes imperialistas, lo que les permitiría mantener sus relaciones con los grandes Estados, especialmente con los Estados Unidos de Norteamérica, en un plano concreto —y no ilusorio como ahora— de soberanía política.

HACIA LA VERDADERA DEMOCRACIA SOCIAL

La realización de una política económica como la que se ha bosquejado en síntesis sumarísima, requiere una nueva voluntad de Gobierno y una transformación del Estado que se va definiendo, por lo demás, en la perspectiva de nuestra evolución democrática. Hay una disconformidad notoria entre los mecanismos institucionales existentes y las fuerzas colectivas en acción. De ahí resulta una permanente inestabilidad social que se revela en conflicto de variada índole, en la afiebrada búsqueda de soluciones para problemas que reiteradamente se plantean en el desconcierto de los espíritus y de los intereses, ajenos a todo principio normativo.

Es preciso restaurar y perfeccionar nuestro régimen democrático, derogando las leyes de excepción, ampliando el cuerpo electoral, purificando el ejercicio del sufragio, prestigiando la acción de los partidos y dando expresión auténtica, en los organismos rectores de la economía y del Estado, a las fuerzas del trabajo. Están en el espíritu de todos, y aun expuestos en proyectos de ley,

algunas de las principales medidas conducentes a dichos fines. Como muestra de la deshonestidad reinante en los círculos directivos de la política burguesa, conviene tener presente que las iniciativas parlamentarias destinadas a eliminar los vicios más ostensibles de nuestro sistema electoral, han sido resistidas por diversos partidos que se dicen democráticos. El propio Presidente de la República ha estimado inoportuno patrocinarlas por estar a corta distancia del término de su mandato; pero no ha vacilado, sin embargo, en suscribir el convenio de ayuda militar con los Estados Unidos, que tan seriamente compromete nuestro porvenir.

Hay que asegurar la armonía entre las instituciones y las realidades. Las fuerzas sindicales del trabajo deben integrarse orgánicamente en la estructura jurídica del Estado y deben tener, también, participación responsable en la dirección de la Economía. Mientras esto no se realice —como instancia en el proceso de identificación de la sociedad con el Estado que se advierte en la evolución de la democracia hacia el socialismo— han de seguir produciéndose los conflictos que a diario perturban la gestión política, la actividad productora y la estabilidad social.

La participación de los trabajadores en el manejo y en la propiedad de las empresas, haría efectiva su responsabilidad en el desarrollo del proceso económico y aseguraría una mayor justicia en el reparto de los beneficios. Dentro del marco del sistema capitalista, es ésta la única forma de coordinar eficazmente los intereses y los esfuerzos de obreros, técnicos y empresarios, a la vez que de preparar el tránsito hacia las modalidades superiores

de la economía socializada. El respeto a los derechos específicos de los trabajadores, y la libertad de sus sindicatos frente al poder político, son condiciones fundamentales de su colaboración al progreso económico y al orden democrático.

Los partidos políticos, órganos regulares de la opinión pública, de cuyo libre funcionamiento depende la vigencia del régimen democrático, son, sin duda, los llamados a promover las transformaciones institucionales que reclaman la realidad política, económica y social de nuestro país. Dentro de una verdadera democracia, el sufragio de la ciudadanía se ejercita, más que en función de los hombres, en función de los partidos. Los partidos son, pués los sujetos reales de la gestión democrática. Cuanto se haga por asegurar su cohesión, su disciplina y su prestigio, evitando que en ellos prosperen el personalismo y la corrupción, que lleguen a dirigirlos como jefes y representarlos en el Parlamento y en el Gobierno, personas sin solvencia moral, que las ambiciones de individuos y de grupos los dividan y multipliquen, es trabajar por el robustecimiento y la dignificación de nuestra democracia.

MANTENGAMOS LA FE EN NUESTROS DESTINOS

Pero, por perfectas que sean las instituciones políticas y los organismos, por muy bien acordados que estén al ritmo y al sentido del movimiento social, poco se consigue si no están animados por un vigoroso impulso del espíritu colectivo. El estado de crisis se caracteriza —en lo político, en lo económico y en lo moral— por una pérdida de la confianza en hombres y valores, es decir,

por un sentimiento generalizado de inseguridad frente a la vida y al porvenir. Hay que devolver a los chilenos de hoy la confianza en ellos mismos, base de cualquiera empresa nacional de trascendencia, suscitar en ellos, sobre todo en los jóvenes, la conciencia de sus fuerzas, de sus posibilidades y de sus deberes.

Hay mucho que hacer. Hay que organizar y fomentar la producción, a fin de elevar el nivel de vida de las masas de acuerdo con los dictados de la justicia social. Hay que restaurar y perfeccionar la estructura democrática del Estado, incorporando al régimen institucional las fuerzas del trabajo. Hay que ampliar y racionalizar los servicios de asistencia y seguridad social, extendiéndolos, como función directa del Estado, a toda la población. Hay que reconstruír totalmente la educación pública y extender la cultura de manera sistemática en todos los sectores de la sociedad. Hay que lavantar viviendas, y roturar campos, y abrir caminos, y colonizar zonas distantes. Hay que dignificar el trabajo productor en todas sus formas, haciéndolo condición esencial de ciudadanía activa. Hay que promover los esfuerzos solidarios y los entusiasmos convergentes de partidos y de gremios, de individuos y organizaciones que sustenten ideales de avanzada social, en torno a los grandes objetivos comunes de una política creadora. Hay mucho que hacer, porque debemos trazarnos en el inquieto mundo de hoy, una trayectoria vital, un destino histórico.

CUADERNOS SOCIALISTAS

Con este folleto iniciamos la publicación de los CUADERNOS SOCIALISTAS que ofrecemos a los trabajadores y estudiosos de nuestros problemas sociales de todo el país. Ellos serán un guía útil en la lucha permanente por la realización de la revolución chilena en que los sectores más conscientes de nuestra nacionalidad se encuentran empeñados.

Entre los próximos números que publicaremos se destacan los siguientes:

PRESENCIA DEL SOCIALISMO EN CHILE, de Oscar Waiss.

EL IMPERIALISMO Y LA LUCHA POR NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL, de Federico Klein.

SOCIALISMO Y COMUNISMO, de Julio C. Jobet.

HACIA LA REFORMA EDUCACIONAL, de Eugenio González.

LE REFORMA AGRARIA, de Clodomiro Almeyda.

LUCHEMOS POR LA UNIDAD SINDICAL, de Aniceto Rodríguez.

Los pedidos de estos folletos deben hacerse a BELARMINO ELGUETA B., casilla 9031, Santiago. El valor de cada ejemplar es de $ 10.— y se despecharán contra-reembolso o previo pago del pedido. Por pedidos mayores de 50 ejemplares 20% de descuento.

★